

LA INTERNACIONAL DEL CRIMEN

Por Carlos SUAREZ M.

El asesinato del general Juan José Torres, atribuido por sus amigos y colaboradores a la directa responsabilidad de las dictaduras de Bolivia y Argentina, viene a replantear una situación que hasta hoy motivó algunas declaraciones oficiales en América Latina, pero que salvo en el caso concreto de México no dio lugar a condenas expresas.

Los gobiernos, tan susceptibles en otros casos (léase Cuba), han guardado un ominoso silencio, prefiriendo mantener las formas de unas relaciones diplomáticas ya viciadas por la irrepresentatividad más absoluta.

Porque así como existen en América Latina dos planos de evaluación que signan su historia y definen las posiciones políticas: el continente legal y el continente real, también las soberanías han de medirse en función del contenido que les den los pueblos y no, exclusivamente, por el reconocimiento de los estados y las organizaciones internacionales.

Frente al aberrante crimen cometido contra el pueblo boliviano en la figura del ex presidente Torres, surge nítida la reacción de los sectores que realmente representan a los pueblos de Bolivia y Argentina.

Los mineros, fabriles y estudiantes que declararon paros de repudio en diversas zonas del país sudamericano, dando así a la dictadura de Bánzer la ocasión de mostrar el grado de su "pesar" ante la muerte del general patriota, se suman a las organizaciones populares argentinas que dentro de su territorio o en el exilio manifestaron el sentimiento de las masas trabajadoras de la nación silenciada por la censura y reprimida con saña por los generales "occidentales y cristianos" que orienta el dictador Videla.

Es así como cobran sentido las palabras de Rodolfo Puiggrós, quien en nombre del Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino despidió a Torres, diciendo: "Fue en una Argentina estafada y mediatizada por un grupo de militares obedientes a la CIA que perdió la vida nuestro compañero y amigo", mientras que Ricardo Obregón Cano señalaba al respecto: "En nombre de mi pueblo, que repudia el crimen y el sadismo de la dictadura de los militares traidores a su país y al mandato libertador de José de San Martín, trasmitimos a los hermanos bolivianos la convicción y la seguridad de que el agravio a los trabajadores y masas bolivianas igualmente nos corresponde, como nos corresponderá el deber de acabar con la infame ralea de los explotadores y asesinos a

sueldo del imperialismo y la oligarquía".

LOS HECHOS HABLAN

Los hechos hablan por sí solos como para seguir buscando justificaciones cuñalescas o rebuscadas argumentaciones que fundamenten el silencio de ciertos sectores.

Las declaraciones de la viuda del general Torres, coincidentes con las de varios dirigentes bolivianos, se unen ahora a las efectuadas por el político uruguayo Ferreyra Aldunate sobre los asesinatos de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Los directos responsables de tales aberraciones contra el derecho de asilo y la vida de los ciudadanos son los gobernantes argentinos.

Y si a ello se le suman las cínicas y absurdas declaraciones del ministro Harguindegui, dignas de figurar en una antología del disparate, acerca de las presuntas razones "personales" que habían motivado la desaparición de Torres, quien pocas horas después aparece muerto con varios balazos, creemos que ya nadie puede dudar de las características de la dictadura argentina.

En Buenos Aires se hallan actualmente concentrados los servicios de inteligencia de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile y Brasil, cuyas acciones impunes desafían todas las disposiciones de la ONU en la materia, de la misma forma que violan los compromisos firmados por los respectivos gobiernos.

Aducir entonces, como lo hacen los hipócritas del coloniaje, que condenar y luchar contra esos regímenes significa "intervenir en los asuntos internos de los Estados", implica descalificar las luchas libertadoras de Hidalgo, Bolívar, San Martín, Artigas, Martí y tantos otros precursores de la primera independencia latinoamericana.

LA VIGENCIA DEL TERROR

Las reiteradas experiencias que en Bolivia y Argentina se llevaron a cabo para detener la insurgencia popular, apelando a las formas desenfundadas de una violencia institucionalizada por los gobiernos militares o pseudoconstitucionales, concluyeron siempre en el más estrepitoso de los fracasos.

Alertados por esas derrotas, sufridas a pesar de la posesión de un aparato de control altamente desarrollado, los planificadores de la CIA preconizan ahora la aplicación de la "contrainsurgencia" que los ejércitos francés y norteamericano ejercitaron en Indochina y Argelia.

Los teóricos de la guerra contrarrevolucionaria, que asocian los legítimos reclamos políticos o sociales de las masas con el "pe-

ligro comunista", consideran que los enemigos no son solamente las organizaciones revolucionarias sino que tal categoría involucra a toda la población.

Para los Videla, Bánzer o Bordaberry, basta con ser ciudadano (los trabajadores y estudiantes con mayor razón) para estar incurso en las penalidades y atropellos de sus grupos de choque, y ya ni se hable de los dirigentes populares.

Tal filosofía reaccionaria explica los esfuerzos de Pinochet y demás congéneres dictatoriales por suprimir el derecho de asilo e imponer a través de la OEA un ejército interamericano represivo. Dentro del curso de acción contrarrevolucionario se inscriben los asesinatos de Torres, Michelini, Gutiérrez Ruiz, Prats y los centenares de patriotas que luchan por restablecer la vigencia de la auténtica democracia y la genuina libertad.

Si los epígonos latinoamericanos de Hitler y Mussolini, expresados cabalmente en Argentina por los militares que cambiaron el uniforme sanmartiniano por la negra chaqueta del verdugo, consideran derogados los principios constitutivos del país y los reemplazan con los manuales de contrainsurgencia elaborados en el Pentágono, está claro que su nacionalidad original ha desaparecido.

De alguna manera los despropósitos del general Onganía, pionero hace más de diez años de los que en nuestros días sostienen la "supresión" de las soberanías en beneficio del internacionalismo represivo, se tornan atterradamente reales.

Sin embargo, en las minas de Bolivia y las fábricas de Argentina, en las universidades y los campos, la clase trabajadora está brindando el testimonio de una resistencia que preanuncia el triunfo históricamente inevitable de ambos pueblos. Y cuando ello suceda, el general Juan José Torres se hallará presente con su trayectoria y conducta de patriota consecuente.